

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 4 ° Juzgado de Letras Civil de
Antofagasta
CAUSA ROL : C-3467-2019
CARATULADO : CORTES / SILVA ARAYA DANIEL SAMUEL Y
OTRO

Antofagasta, diecisiete de Agosto de dos mil veintitrés

VISTOS:

Con fecha **24 de junio de 2019**, comparece doña Ana Cecilia Karestinos Luna, abogado, con domicilio en esta ciudad, calle Sucre N° 220, oficina 419, en representación de don **Eduardo Segundo Gallegos Díaz**, jubilado y de doña **Pascuala de los Santos Cortés Cortés**, labores de casa, ambos con domicilio en esta ciudad, calle Tres Marías N° 1638, por sí y en calidad de herederos en la sucesión de don Eduardo Antonio Gallegos Cortés; e interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra de don **Daniel Samuel Silva Araya**, chofer, con domicilio en Antofagasta, calle Limache N° 956, por la responsabilidad civil que le cabe como autor de los delitos consumados de cuasidelito de homicidio y conducción de vehículo sin contar con licencia profesional e infracciones reglamentarias; y, solidariamente, en su calidad de propietaria del vehículo involucrado en el accidente que se señalará, en contra de la sociedad **Soluciones Asfálticas S.A.**, del giro de su denominación, con domicilio en esta ciudad, Avenida Bernardo O'higgins N° 1338 (segundo acceso por Avelino Contardo N° 933), oficina 1402, representada por doña Paula Alejandra



Concha Silva, de la cual ignora profesión u oficio y del mismo domicilio anterior.

Relata que el día 3 de marzo de 2018, siendo aproximadamente las 10:00 hrs., en circunstancias que don Daniel Samuel Silva Araya conducía el vehículo camión patente GGWT.51-4, marca Jac, modelo Urban HFC1083, color blanco, año de fabricación 2014, combustible Diesel, con un peso bruto vehicular de 10.240 kilos, cargado con implementos de señalética, letreros, fierro y herramientas, de propiedad de Soluciones Asfálticas S.A., por Avenida Salvador Allende en dirección Oriente-Poniente, cuando al llegar a la intersección con Avenida Oscar Bonilla, no respectó el semáforo con luz roja que enfrentaba, colisionando al automóvil PPU.WV8121, marca Suzuki, color azul, modelo Maruti, año 2007, conducido por don Carlos Segundo Flores Páez, quien circulaba había el Norte por Avenida Oscar Bonilla, colisionando de igual forma con la parte trasera del camión a la camioneta PPU, FGFS.41 conducido por don Juan Guillermo Carvajal Alvarez, para luego perder la totalidad del control de camión, impactando un semáforo y un poste de alumbrado público, atropellando al hijo de sus mandantes, don Eduardo Antonio Gallegos Cortés, quien se encontraba esperando locomoción colectiva, en la acera Norte de calle Salvador Allende pasado Avenida Oscar Bonilla.

Señala que a consecuencia del accidente relatado, la víctima, don Eduardo Antonio Gallegos Cortés resultó con politraumatismo consistente en un shock hipovolémico por hemoperitoneo masivo, secundario a desgarró esplénico; lesiones que fueron vitales, falleciendo, el mismo día del



accidente a las 23: 00 horas, en el Hospital Regional de esta ciudad "Doctor Leonardo Guzmán".

Hace presente que la víctima padecía de discapacidad auditiva, por lo que al momento del accidente, no entendía lo que pasaba y sólo llamaba a su padre.

Dice que los hechos narrados dieron origen a los autos RUC 1010009591-9, RIT 2639-2018 seguidos ante el Juzgado de Garantía de esta ciudad, causa que concluyó con la dictación de la sentencia de fecha 22 de agosto de 2018, dictada en juicio simplificado-abreviado, la que se encuentra firme o ejecutoriada y, que condena al demandado don Daniel Samuel Silva Araya, como autor de los delitos de cuasidelito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 492, en relación con el artículo 391 N° 2 y 490 N° 1 del Código Penal y, artículos 104 y 144 de la ley 18.290; y del delito consumado de conducción de vehículo sin contar con licencia profesional debida.

Expresa que los demandantes, por su modesta situación económica, carecían de los medios económicos para hacer frente a los gastos de sepultación de su hijo. Ante ello, se apersonaron a la empresa propietaria del camión que participó en el accidente, para pedirles ayuda económica, negándose a prestar auxilio alguno.

Refiere que por gestiones realizadas ante el Municipio de esta ciudad, se logró que la Sra. Alcaldesa, ordenara a la Administración del Cementerio, hiciera entrega de un nicho en forma temporal, por 5 años, para la sepultación del hijo de sus representados.



Afirma que para los gastos que demandaron los servicios fúnebres, vecinos, amigos y familiares de la víctima, efectuaron aportes en la medida de sus posibilidades.

Los gastos de hospital fueron cubiertos sólo en parte por el seguro automotriz quedando un saldo de \$1.328.517.-

Manifiesta que todas estas circunstancias se han puesto de relieve para destacar que el accidente en cuestión y sus consecuencias no sólo significaron lamentar un resultado trágico inmediato en el tiempo, como fue la muerte de Eduardo Antonio Gallegos Cortés, sino hasta la fecha un dolor insuperable e irremediable a nivel parental y familiar.

Expresa que son Eduardo Antonio Gallegos Cortés, era un hombre joven de 47 años de edad, que se encontraba en la plenitud de su vida, soltero y sin hijos, con discapacidad auditiva, que desarrollaba su proyecto de vida viviendo con sus padres, hermanas y sobrinos, con una fuerte relación de unión y afecto entre todos ellos. En su hogar, el señor Gallegos Cortés, se mostró siempre como un hijo y tío ejemplar. Sin vicios, cariñoso y amante de sus padres, hermanas y sobrinos, les dedicó siempre todas sus atenciones y desvelos; gastaba poco en su persona, destinando casi todas sus entradas al mantenimiento del hogar. Agrega que velaba en forma diligente por la educación y formación física, intelectual y moral de sus sobrinos, con los cuales tenía una relación formadora de padre. Además, era un vecino que participaba en todas las actividades de su barrio, especialmente en el club de fútbol.



Plantea que cuando se sufre una pérdida importante, como la muerte de un hijo, se interrumpe el proyecto de vida esperado. No se puede seguir ese plan puesto falta un protagonista importante. La muerte de un hijo siempre, siempre es traumática. La premisa que avala esto afirma: el hecho es simple, es antinatural. En el proceso de la vida, primero mueren las personas mayores y después, siguen los demás, a medida que se van haciendo mayores.

Expresa que la muerte por accidente, además, es casi siempre violenta e inesperada, como ocurrió en el caso de autos. El impacto es tal que una de las primeras reacciones de sus representados como padres fue sentirse responsables de la muerte de su hijo, aunque las circunstancias que lo han conducido a ella escapan completamente a su control. Paralelo a este sentimiento de culpabilidad aparece el dolor, el sufrimiento, aunque parece que se mantiene en un discreto segundo plano. El padre y/o madre no pueden dejar de revisar una y otra vez la última vez que vieron a su hijo y lo que hicieron o podían haber evitado.

Asegura que la muerte de Eduardo Antonio Gallegos Cortés, significa para sus representados un doble perjuicio: un daño moral y un daño material.

A.- Desde el punto de vista pecuniario, la muerte de don Eduardo Antonio Gallegos Cortés, significó a sus representados desembolsos de dinero y la pérdida de una renta. En efecto, el hecho ilícito del demandado priva a sus representados de uno de sus medios de subsistencia, pues su hijo siempre aportó al hogar con su pensión asistencial. Dice



que calculando solamente una entrada de \$1.488.024.-, anuales, que era la suma mínima que el difunto destinaba exclusivamente a los suyos, durante 20 años que, a lo menos, habría podido vivir, se obtiene una suma de \$29.760.480.-

B.- En cuanto al daño moral, precisa que se debe considerar lo que significa la muerte de don Eduardo Antonio Gallegos Cortés para sus representados, atendida las condiciones personales de éstos y de aquel y las circunstancias de su muerte.

En cuanto al derecho, refiere que la reparación civil surge como resultado de la comisión de un delito y el fundamento que origina la obligación de reparar, es la existencia del daño civil causado por este ilícito penal, por lo que esta debe fijarse en un monto suficiente, para el cumplimiento de sus propios fines.

Argumenta que la responsabilidad extracontractual es aquella en que la obligación de indemnizar surge de un delito o cuasidelito civil. Lo que caracteriza esencialmente al delito y cuasidelito civil es el hecho de inferir injuria o daño a otra persona. El Código Civil es bien explícito al respecto: a) El artículo 1437 dice que las obligaciones nacen ya a consecuencia de un hecho que haya inferido injuria o daño a otra, como en los delitos y cuasidelitos; y, b) El artículo 2314 señala que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.



Expresa que en estos autos se trata de indemnizar el daño derivado de la responsabilidad extracontractual generado a causa de la muerte en un accidente de tránsito.

Refiere que en materia de accidentes de tránsito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la ley 18.290, toda persona que conduzca un vehículo en forma de hacer peligrar la seguridad de los demás, sin consideración de los derechos de éstos o infringiendo las reglas de circulación o de seguridad establecidas en esta ley, será responsable de los perjuicios que de ello provengan.

Manifiesta que cuando la víctima directa de un acto lesivo, fallece como consecuencia del mismo, sus herederos están legitimados para reclamar la indemnización del perjuicio por ella padecido, mediante el ejercicio de la denominada acción hereditaria o acción hereditatis, transmitida por el causante, y en la cual demandan, por cuenta de éste, la reparación del daño que hubiere recibido. El presupuesto de la acción hereditaria es la existencia de una sucesión, esto es, la muerte de una persona respecto de la cual, en virtud del artículo 1013 del Código Civil se defiere de manera inmediata o condicional, la herencia o legado.

Agrega que al lado de la acción hereditaria, se encuentra la que corresponde a todas aquellas personas, herederas o no de la víctima directa, que se ven perjudicadas con su deceso, y mediante la cual pueden reclamar la reparación de sus propios daños. Trátase de una acción en la cual actúan jure propio, pues piden por su propia cuenta la



reparación del perjuicio que personalmente hayan experimentado con el fallecimiento del perjudicado inicial.

Plantea que se trata de acciones diferentes. La primera, puesta al alcance de los causahabientes a título universal de la víctima inicial, que se presentan en nombre del causante, para reclamar la indemnización del daño sufrido por éste, en la misma forma en que él lo habría hecho. La segunda, perteneciente a toda víctima, heredera o no del perjudicado inicial, para obtener la satisfacción de su propio daño.

Reseña que la acción hereditaria y la acción personal pueden acumularse perfectamente, pues nada se opone a que el heredero pretenda en el mismo juicio la reparación de los daños irrogados a su causante y la reparación de los propios.

Plantea que de los artículos 2284, 2314 y 2319 del Código Civil se desprende que para que un hecho genere responsabilidad extracontractual, es necesario que estén presentes los siguientes elementos:

- 1.- Que su autor sea capaz de delito o cuasidelito;
- 2.- Que ese hecho (acción u omisión) provenga de dolo o culpa;
- 3.- Que cause un daño;
- 4.- Relación de causalidad entre el hecho doloso o culpable y el daño causado;

Afirma que en el caso de autos, se presentan todos y cada uno de los elementos referidos, a saber:

- 1.- Capacidad delictual y/o cuasidelictual del demandado principal.



Afirma que el demandado principal de autos no se encuentra dentro de las excepciones contempladas en el artículo 2319 del Código Civil, toda vez que se trata de una persona mayor de edad y, para conducir el tipo de vehículo que participó en el accidente se debe tener cualidades y conocimientos especiales que excluyen a la demencia y la minoría de edad.

2.- El dolo y la culpa del demandado principal.

Afirma que en el caso de autos, es evidente que el demandado principal actuó, a lo menos, con culpa.

Indica que la culpa ha sido definida por el artículo 44 del Código Civil y que aunque las definiciones que da se refieren más bien a la culpa contractual por ser la única que admite graduación, son aplicables igualmente en materia de delitos y cuasidelitos. De esas definiciones se desprende que la culpa (que ese artículo y otros hacen sinónimo de descuido o negligencia) es la falta de aquella diligencia o cuidado que los hombres prudentes emplean ordinariamente en sus actos y negocios propios.

Dice que la culpa entonces, es un error de conducta, supone descuido, imprudencia, negligencia, falta de precaución, omisión de los cuidados que la prudencia requiere o hace innecesarios, sin que sea de rigor que haya una infracción reglamentaria.

Expresa que conforme los hechos narrados en el libelo, el demandado Daniel Samuel Silva Araya, al momento de producirse el accidente que da origen a los daños, cuya indemnización se demanda, no obró con la debida diligencia o cuidado que los hombres prudentes emplean en sus actos o



negocios propios, específicamente, en la conducción del camión. Se estableció que el demandado circulaba a una velocidad excesiva, no lo hacía atento a las condiciones del tránsito, sin respetar la señal en rojo del semáforo, infringiendo, entre otras, las siguientes normas de la ley del tránsito: artículos 114, 148, 170, 172 nros. 1, 2, 7 y 10.

Afirma que la causa basal de la colisión de autos fue el hecho de que el conductor del camión patente GGWT.51, don Daniel Samuel Silva Araya, no respetó el disco "Pare" porque no estuvo atento a las condiciones del tránsito y por ende, incurrió en una infracción del tránsito de aquellas consideradas como gravísimas de conformidad con el numeral 2 del artículo 197 de la ley 18.290.

Indica que en el presente caso, el no respetar un disco "Pare" conforme la normativa aplicable, hace presumir la responsabilidad del conductor que infringe esta disposición.

Señala que el artículo 174 de la ley 18.290 establece como sujeto responsable al conductor, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros, según lo establecido en los artículos 2284, 2314 y 2319 y siguientes del Código Civil.

Refiere que a raíz de lo anteriormente expuesto se puede sostener que en el caso de autos la apreciación de la conducta del autor del daño es innecesaria si ésta proviene de la violación de una obligación determinada impuesta por la ley o un reglamento, en este caso la ley del tránsito, constituyéndose lo que se denomina culpa contra la legalidad.



Precisa que se habla de culpa contra la legalidad para referirse a los casos en que una determinada actividad se encuentra reglada por el legislador, precisamente para evitar la producción de algún daño. Cuando así ocurre, hay culpa por el solo hecho de que el agente no haya dado cumplimiento a la reglamentación, esto es, si ha ejecutado el acto prohibido o no ha realizado el ordenado por la ley o el reglamento, pues ello significa que omitió las medidas de prudencia o precaución que una u otro estimaron necesarias para evitar un daño.

3.- El daño.

Indica que don Arturo Alessandri define el daño como todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor, crédito, afectos, creencias, etc.

Plantea que el artículo 2314 se limita a decir que el que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización y daño, según su sentido natural y obvio, es el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien.

Afirma que en el caso de autos, el daño cumple además, con todos los requisitos exigidos por la ley, para ser considerado tal e indemnizable, a saber:

a) Fue producido por una persona distinta de los ofendidos;

b) Evidentemente, consiste en una perturbación o molestia anormal;

c) Proviene de un actuar ilícito, cual es el actuar culpable (negligente e ilegal) del demandado principal;



d) Consiste en la lesión de un interés legítimo, o sea el interés invocado por la víctima debe ser lícito o legítimo, esto es, conforme con la moral y las buenas costumbres.

e) Es cierto, o sea, es real, efectivo, tanto que, a no mediar él, sus representados se habrían hallado en mejor situación.

f) No se trata de un daño reparado.

Expresa, en cuanto a los daños atribuidos, estos se concluyen desde los propios hechos objeto del delito imputado, de la propia ocurrencia del accidente de tránsito, existe "in re ipsa" por el solo hecho del evento dañoso, sin necesidad de probanza alguna tendiente a demostrarlo y su admisión se encuentra amparada por el artículo 2314 del Código Civil.

Indica que con todo, a pesar que el daño moral resulta ser objeto de discusión en cuanto a la intangibilidad de la afectación que provoca, debe ser colegido en definitiva del daño principal.

Refiere que el fallecimiento de don Eduardo Gallegos Cortés es antecedente objetivo del cual se concluye que existe una importante afectación extra-patrimonial que tiene como causa el accidente provocado por el demandado civil. En otras palabras, el ilícito y los resultados que trae, reviste la particularidad de ser idóneo y guarda notoriedad para entender la existencia de este daño, es decir, presumirse la existencia del daño como las secuelas que trajo el actuar antijurídico del demandado.



Expresa que ante el ilícito que produjo la muerte de don Eduardo Antonio Gallegos Cortés, solicita se conceda indemnización por los siguientes conceptos:

a) Por daño emergente, que básicamente consiste en los gastos médicos y de sepultación cubiertos por los demandantes;

b) Por lucro cesante, que se hace consistir en la pérdida de la ganancia que le hubiera reportado a la víctima el proseguir con su actividad normal si no hubiera ocurrido el hecho dañoso.

Enseguida expone jurisprudencia en relación al lucro cesante.

4.- Relación de causalidad o nexo causal.

Argumenta que debe existir un nexo o relación inmediata, de causa a efecto, entre el acto hecho del hombre (acción u omisión) y el evento o daño, de manera que se pueda inferir de ese nexo que el daño no se habría verificado sin aquel acto u omisión, el cual, debe ser premisa necesaria para verificación del daño.

Señala que si el daño se habría realizado de todos modos, aun sin el hecho doloso o culpable, no hay relación causal entre ambos, y el autor del hecho no es responsable del daño sufrido por la víctima, aunque su acción u omisión sea dolosa o culpable.

Luego se pregunta quien podría cuestionar que de no mediar el accidente de autos, producido por la culpa del demandado principal, según lo expuesto, se habrían producido tanto los daños patrimoniales como también los morales a los demandantes.



Dice que resulta evidente la existencia del nexo o relación de causalidad entre el actuar culposo del demandado y los daños, patrimoniales y morales, irrogados a sus representados.

Indica que las consecuencias directas del ilícito resultan ser graves y conducentes a la existencia de un daño que tiene como nexo causal el ilícito cometido por el demandado don Daniel Samuel Silva Araya, quien no desconoce las consecuencias del hecho en particular, al haber prestado declaración judicial durante el proceso penal. Agrega que como se acreditará en juicio, el demandado no solo maneja un vehículo de alto calibre, en este caso un camión de 10.240 kilos peso bruto, sino que lo hacía sin haber obtenido licencia para conducir, requisito mínimo para poder conducir vehículos.

Afirma que estos elementos inciden directamente en la responsabilidad civil del demandado, quien en los hechos, poseyendo todos los elementos tendientes a representarse que su conducción resultaba poco segura y podría provocar daños en terceros, ya que manejaba sin poseer licencia de conducir, no lo hizo y de todas formas condujo, sin detenerse en el semáforo en rojo por Avenida Salvador Allende, colisionando vehículos hasta perder el control del camión y llegar a arrollar a don Eduardo Antonio Gallegos Cortés.

Señala que debe entenderse que en la especie concurren una serie de requisitos para entender la responsabilidad civil del demandado, la que fundaría no solo en los requisitos generales de la responsabilidad extracontractual, sino además el propio hecho antijurídico, o



en lo que se denomina "rep ipsa loquitur", a saber: a) El daño alegado no se habría provocado de no haber existido negligencia de parte del demandado; b) El daño fue causado como consecuencia de su actuar, encontrándose esta condición siempre bajo su control exclusivo.

Finalmente, plantea la solidaridad de la demandada Soluciones Asfálticas S.A. Sostiene que no cabe duda que la demandada Soluciones Asfálticas S.A. es solidariamente responsable, junto al demandado principal, en su calidad de propietaria del vehículo, de los daños y perjuicios ocasionados por el siniestro a sus representados.

Afirma que dicha solidaridad emana de lo dispuesto en los incisos 1° y 2° del artículo 174 de la ley N° 18.290 sobre tránsito que prescribe: De las infracciones a los preceptos del tránsito será responsable el conductor del vehículo. El conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que éstos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionaren con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la legislación vigente.

Indica que con certificado de anotaciones vigentes que se acompaña en un otrosí de esta presentación, se acredita que la demanda Soluciones Asfálticas S.A., era al momento del accidente de autos, propietaria del camión, patente GGWT.51, marca Jac, modelo Vieban, color blanco, año de fabricación 2014, involucrado en el accidente.



Por lo expuesto y citando los artículos 2314, 2315, 2316, 2319, 2329 y siguientes del Código Civil, artículos 114, 148, 170, 172, 174 de la ley 18.290 sobre Tránsito, artículo 253 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, solicita tener por interpuesta demanda civil de indemnización de perjuicios en juicio ordinario en contra de don Daniel Samuel Silva Araya, ya individualizado, y solidariamente en su calidad de propietario del vehículo involucrado en el accidente, Soluciones Asfálticas S.A., representada legalmente por doña Paula Alejandra Concha Silva, ambos ya individualizados, admitirla a tramitación, acogiendo la demanda de autos, y en definitiva declarar y condenarlos:

a) A pagar a don Eduardo Segundo Gallegos Díaz y a doña Pascuala de los Santos Cortés Cortés, en su calidad de sucesión de don Eduardo Antonio Gallegos Cortés, la suma de \$29.760.480.-, por concepto de lucro cesante o, la suma mayor o menor que el tribunal se sirva fijar conforme al mérito de autos y más los reajustes e intereses que el tribunal determine;

b) A pagar a los actores la suma de \$1.978.518.-, por concepto de daño emergente; suma que deberá pagarse debidamente reajustada, entre la fecha de la presentación de esta demanda, y la de su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo período. En subsidio, para que sean condenados a la suma mayor o menor que el tribunal fije conforme al mérito de autos, más los reajustes e intereses que el tribunal determine.



c) A pagar a don Eduardo Segundo Gallegos Díaz y a doña Pascuala de los Santos Cortés Cortés la suma de \$200.000.000.-, por concepto de daño moral; suma que se pagará debidamente reajustadas, entre la fecha de la presentación de esta demanda y la de su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo período. En subsidio, para que sean condenados a la suma mayor o menor que el tribunal se sirva fijar conforme al mérito de autos, más los reajustes e intereses que el tribunal determine.

d) Que se declare a la demandada Soluciones Asfálticas S.A., representada legalmente por doña Paula Alejandra Concha Silva, ambos ya individualizados, solidariamente responsable de los daños y perjuicios señalados, en su calidad de propietaria del vehículo individualizado en autos, y consecuentemente, se le condene al pago de las indemnizaciones solicitadas en las letras a), b) y c) precedentes, respecto de ambos representados, o en subsidio a la suma mayor o menor que el tribunal se sirva fijar conforme al mérito de autos, más los reajustes e intereses que el tribunal determine.

Con fecha **26 de septiembre de 2019**, comparece don Ramón Miranda Tapia, abogado, actuando en nombre y representación de la demandada solidaria de autos, Soluciones Asfálticas S.A., domiciliado en esta ciudad, calle Teniente Manuel Orella 610, oficina 1303, Antofagasta, y contestando la demanda civil interpuesta en contra de su representada, solicita su rechazo, con costas, y en subsidio, la rebaja de los montos solicitados.



Niega los hechos en que se basa la acción infraccional deducida, alegando que éstos y las supuestas prestaciones consecuenciales deberán ser acreditadas, acorde al principio de onus probandi establecido en el artículo 1698 del Código Civil, por el demandante, salvo los que reconozca.

Afirma que queda de manifiesto la evidente carencia de prueba en lo infraccional, relativo a la responsabilidad de su representada lo que debe concordarse con el artículo 340 del Código Procesal Penal, el que señala: Que nadie podría ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley.

Destaca el inciso final de la norma citada la que dispone que no se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración, es decir, se requieren pruebas más allá de la propia declaración del querellado y demandado civil para tener por acreditada la responsabilidad infraccional.

Plantea que en estricto rigor, de las normas de derecho común, el Código Civil indica en su artículo 1698 que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta, norma que establece el llamado onus probandi, o carga de la prueba, la cual aplicada en material extracontractual señala que tanto la responsabilidad como el daño y en general todos los requisitos de la llamada responsabilidad aquiliana debe ser probada por quien la alega



a diferencia de lo que sucede en la responsabilidad contractual en la cual la culpabilidad se presume.

Argumenta la ausencia de responsabilidad del propietario y mero tenedor en la aplicación del artículo 174 de la ley 18.290. Destaca que su representada en su calidad de demandada solidaria no causó el daño alegado en forma directa, ya que lógicamente no pudo tener la calidad de ser solo el propietario o mero tenedor del vehículo, siendo la responsabilidad que se le atribuye de tipo solidaria por mandato especial del legislador en materia de accidentes de tránsito de suerte tal que la demandante debe acreditar que en el caso de su mandante se reúnen los requisitos necesarios para hacerla responsable.

Indica que en efecto, la sentencia que acompaña la contraria dictada por el Juzgado de Garantía de esta ciudad acredita que el ente judicial determinó la responsabilidad del conductor por el cuasidelito de lesiones graves con resultado de muerte en grado consumado, sin embargo, esto no necesariamente acredita la responsabilidad civil de los daños alegados.

Argumenta que la demandante no considera que son dos responsabilidades de naturaleza distinta, la primera es la responsabilidad infraccional que pueda tener una parte en razón de la infracción cometida, y la segunda es la responsabilidad civil de los daños las cuales no necesariamente son las mismas y puede existir sin la otra.

Dice que así las cosas, el hecho de haber sido condenado el conductor de autos, no necesariamente implica que su mandante deba responder por los daños de manera



automática pues se debe acreditar los presupuestos de la responsabilidad civil, en particular el daño y relación de causalidad, y en el caso de su mandante si se dan los presupuestos para hacerla responsable de manera solidaria. Indica que para dichos efectos se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 171 de la ley 18.290 la que señala que el mero hecho de la infracción no determina necesariamente la responsabilidad civil del infractor, si no existe relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido por el accidente. En consecuencia, si una persona infringe alguna disposición y tal contravención no ha sido causa determinante de los daños producidos, no estará obligado a la indemnización.

Indica que de la manera señalada, la demandante no solo está obligada a acreditar la infracción de tránsito, sino que la sentencia que acompaña no la libera de la carga probatoria de acreditar la relación de causa y efecto entre el actuar del demandado y los daños causados a la víctima, como los presupuestos de la responsabilidad solidaria.

Dice esto último ya que, si bien, posterior a la colisión es que la víctima, hijo de los demandantes, fallece, se desconoce si existían otras causas preexistentes que hayan derivado o contribuido en el sensible fallecimiento de la víctima.

Plantea que así, la sentencia que acompaña solo acredita la responsabilidad infraccional respecto del ilícito penal, no así la responsabilidad civil que pudiese serle atribuida a las partes.



Alega la improcedencia de la responsabilidad solidaria por existir eximente de responsabilidad expresa en la ley 18.290. Precisa que por su parte, la responsabilidad infraccional y civil del conductor del vehículo de su mandante no necesariamente acredita la responsabilidad civil pues se debe tener presente que su mandante solo tiene responsabilidad en carácter de solidaria por tener un título respecto del vehículo, pero esta responsabilidad no es absoluta pues la misma ley de tránsito establece una exención de responsabilidad para determinados casos y transcribe el artículo 174 de la ley 18.290.

Asegura que esta norma establece una exención de responsabilidad del propietario o mero tenedor que acredite que el vehículo participante en la colisión o atropello fue utilizado sin su autorización, y sucede que en el caso de marras el vehículo fue utilizado por un guardia de seguridad perteneciente a una empresa externa de servicios, quien abusando de sus facultades utilizó el vehículo para fines particulares, esto sin la autorización de su mandante.

Precisa que el conductor demandado al tiempo de la colisión tenía la calidad de guardia, de una empresa externa a su mandante, a saber la empresa denominada Servicios de Seguridad Privada Melisa Condori Cerrano E.I.R.L. o CRISETHA E.I.R.L., persona jurídica del giro de su denominación rol único tributario 76.747.378, domiciliada en esta ciudad, pasaje Centinela 4159 Antofagasta.

Asegura que el conductor causante de la colisión o atropello tenía solo la calidad de guardia de seguridad, pero nunca fue dependiente de su mandante.



Asevera que las funciones de guardia de seguridad no abarcan la función de conducir vehículos de la empresa, pues estos están habilitados para otros fines y no necesariamente para la función de seguridad. Dice que para estos efectos su mandante contrata empresas externas quienes proporcionan servicios de seguridad, los que prestan el servicio a través de sus propios trabajadores, pero como ya ha señalado, éstos no son dependientes de su mandante y en razón de ello no tienen facultades para utilizar bienes de la empresa y de hecho tienen prohibición absoluta de hacerlo.

Sostiene que en el caso de marras, el vehículo participante en la colisión y de propiedad y mera tenencia de su mandante, fue utilizado sin la autorización ni conocimiento de su mandante, de manera que se encuentra en la hipótesis del artículo 174 de la ley 18.290, no procediendo hacer responsable a su mandante de la colisión de autos.

Expresa que acreditará que el auto fue utilizado contra la voluntad de su mandante no configurándose en este caso la responsabilidad solidaria invocada por el actor.

Argumenta la falta de legitimidad pasiva de su representada para ser objeto de las acciones de autos. Dice que en efecto, como se ha esgrimido, su mandante no puede ser objeto de responsabilidad perseguida pues ha operado en la especie la exención de responsabilidad del artículo 174 de la ley 18.290.

Precisa que el conductor que fuese condenado ante el Juzgado de Garantía de esta ciudad utilizó el vehículo sin la autorización de su mandante, pues avisando de sus



funciones se valió de las mismas para poder utilizarlo en pleno y total desconocimiento de su mandante.

Informa que el guardia de seguridad es dependiente de la empresa externa ya individualizada precedentemente, y que en este sentido, las funciones de guardia de seguridad y el control de la disposición de cada trabajador es resorte y responsabilidad del respectivo empleador, que, en el caso de marras, no es su representada.

Indica que por lo anterior, en la especie la responsable solidariamente de los hechos investigados en autos, corresponde a la empresa de seguridad ya citada, esto en razón de la figura de responsabilidad del hecho ajeno.

Refiere que en efecto, tal y como señala el artículo 2320 y 2322 del Código Civil, el empresario o empleador o responsable de una persona, incurre en responsabilidad civil a menos que haya adoptado que obró con la responsabilidad autoridad y cuidado que su calidad le confiere y presente y que en razón de ello no ha podido impedir el hecho.

Dice que acorde con este fundamento la doctrina nacional ha enseñado de la mano de Alessandri que el empresario es civilmente responsable por el hecho ajeno si concurren al menos los siguientes requisitos:

-Que el empresario haya incurrido en culpa o negligencia en la elección, vigilancia, dirección o control de la actividad del dependiente que directa y materialmente causó el daño.

-Que entre el empleador demandado y el agente directo del daño exista una relación de tal naturaleza,



denominada vínculo de subordinación y dependencia que permita presumir que el daño se debió más al descuido de la propia empresa demandada que el acto u omisión del dependiente que material y directamente causó el daño.

-Que el dependiente o agente directo del daño sea capaz del delito o cuasidelito civil que este haya incurrido e dolo o culpa.

-Que el dependiente haya actuado dentro del ámbito de sus funciones y no en abierta extralimitación de las mismas.

Expresa que la responsabilidad civil del empleador es directa y no subsidiaria pues frente a la víctima existe solidaridad pasiva entre el empresario y el dependiente, artículo 2317, de forma que el perjudicado puede demandar la integra reparación al dependiente a la empresa o ambos conjuntamente. El empleador que paga a la víctima podrá repetir contra el dependiente que con culpa causó el daño.

Indica que el obligado a adoptar la debida diligencia respecto de sus dependientes sería la empresa citada y no su mandante pues al haber operado la exención de responsabilidad solidaria del artículo 174 de la ley 18.290 se debe aplicar las reglas generales del derecho y en este sentido alega que la demandante debió dirigirse en contra del tercero responsable conforme lo dispone el artículo 2320 del código civil.

Refiere que tampoco cabe hacer responsable a su mandante bajo dicho estatuto de responsabilidad porque este habría adoptado todas las medidas pertinentes para el cuidado del vehículo, dejándolo cerrado con alarma y dentro de su



propiedad, pero que el guardia de seguridad valiéndose de su cargo, cuestión que no pudo ser previsto por su mandante, se habría valido de métodos desconocidos para su parte para poder salir de la empresa con el móvil, esto sin permiso de su mandante y sin autorización.

Alega que habiendo adoptado las medidas necesarias para evitar este resultado con su vehículo, no procedería responsabilidad solidaria a su mandante en aplicación del artículo 174 de la ley 18.290 y tampoco por régimen de subcontratación, pues indica que si bien existe un tipo de responsabilidad entre empresas mandantes y contratistas, establecida en los artículos 183 A y siguientes del Código del Trabajo, esta sería solo para efectos laborales y no de la materia que se analiza en este caso.

Respecto de los daños demandados, expone en primer lugar, en cuanto al lucro cesante que la demandante expuso que la víctima de autos era una persona que mantenía siempre el hogar, o que aportaba al mismo, y que generaba una renta de \$1.488.024, que era la suma mínima que destinaba a los suyos, y que un cálculo proyectado a 20 años de aporte familiar generaba \$29.7690.480.-. Al respecto, precisa que la víctima efectivamente tenía un vínculo familiar con los demandantes, a saber su hijo, sin embargo, si afirma que si bien la lógica y la experiencia nos dice que los hijos pueden aportar al hogar en común de los padres, este aporte jamás podría ser vitalicio como lo exponen los demandantes.

Por otro lado, acusa que los demandantes no tienen un derecho real y efectivo sobre las remuneraciones de su hijo, sean las actuales o futuras, en consecuencia, no



entienden porque la demandante exige el pago de una suma de más de 29 millones de pesos a título de la remuneraciones que percibiría su hijo hasta el último día de su vida, en circunstancia que a pesar del vínculo familiar que mantenía con la víctima y que jamás tuvieron derecho a exigir a su hijo el pago de esta remuneración por ende señala que al no tener este derecho no resulta jurídicamente viable exigirlo a través de la figura del lucro cesante pues cualquier aporte efectuado por su hijo, lo es a título de mera liberalidad, por ende, el lucro cesante no podría ser considerando para efectos de indemnizar meras liberalidades.

Hace presente que la misma ley natural que refieren los demandantes, indicaría que los padres son los que ayudan a los hijos y no al revés, y aun cuando así fuese el caso, los hijos están destinados a haber abandono del hogar de sus padres, por ende, no existiría certeza que su hijo aportaba al hogar o que si lo hacía seguiría aportando la misma suma de dinero, lo que señala convertiría el lucro cesante exigido por los demandantes en una mera expectativa. Así las cosas refiere que los padres alegan un derecho indubitado sobre las remuneraciones de su hijo, en circunstancias que jamás han tenido un título legal para percibirla o exigir las más que la mera liberalidad del hijo, convirtiéndolo en una mera expectativa no indemnizable bajo el estatuto civil.

Argumenta que el lucro cesante se basa en una incapacidad supuesta que no está probada por lo que habría un importante grado de especulación al considerar que la víctima podría haber vivido y trabajar ininterrumpidamente hasta el último día de sus vidas, condiciones que no estarían



aseguradas y que podrían ser alteradas por la muerte, enfermedades, cesantía, quiebra, hijos, familia, problemas económicos, sociales, políticos o similares, o incluso por la afectación auditiva que el mismo demandante hace alusión en su demanda, lo que implica que la indemnización pretendida son solo sueños, deseos y anhelos, en lugar de una pérdida de ganancias real o derechos adquiridos, daños seguro y no eventual, con una certeza razonable acerca de su ocurrencia, como lo exige el artículo 1437 del Código Civil.

Respecto del daño emergente, esto es los gastos de sepultura, niega la procedencia de estos, en primer lugar, puesto que indica todos los gastos habrían sido cubiertos por la municipalidad de Antofagasta, que les cedió un lugar donde destinar a su hijo luego de su fallecimiento, esto indica que la titularidad para exigir esta indemnización y reparación es a la Ilustre municipalidad de Antofagasta y no así de la demandante pues recibir estos dineros, implicaría pagar dos veces, puesto que, con posterioridad, perfectamente la municipalidad podría deducir acciones de repetición o reembolso en contra de su mandante.

Por otro lado, alega que no se trata de un daño que se haya hecho efectivo o que haya disminuido el patrimonio de los demandantes pues tal y como señalan en su demanda no incurrieron en gasto algunos sobre ello, gracias a la municipalidad por ende no podrían pedir a título de indemnización u gasto sobre el cual no incurrieron y no redujo su patrimonio propio.

Manifiesta que el daño emergente es el empobrecimiento real y efectivo padecido por quien solicita



se indemnice y que sin perjuicio de lo anterior, quien reclama un daño debe probarlo.

Así las cosas, acusa que la demanda adolecería de ciertos aspectos formales en orden a detallar o pormenorizar los daños que habría sufrido el vehículo producto de la colisión investigada en autos, lo que limita el derecho a defensa de su parte, puesto que se encuentra en indefensión al momento de alegar fundamentos o descargos relativos al daño emergente solicitado por el actor, pudiendo este último inclusive comprender daños anteriores a la colisión lo que indica desconoce.

Acusa la improcedencia del daño moral en la cuantía solicitada, describiendo que el daño moral y la evolución de su concepto, señalando luego que, según los autores nacionales, afecta la psiquis del individuo y se exterioriza en una depresión, en un complejo, en una angustia constante y permanente, es en este sentido el dolor, la aflicción física o espiritual y, en general, los padecimientos infringidos a la víctima por el evento dañoso y se considera una modificación del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender.

Hace presente que no existe un consenso en cuanto a la naturaleza y su concepto, pero si hay certeza respecto que debe probarse el daño moral, y por ello existen principios de prueba según expone la doctrina, de probanzas que den fe de un detrimento psicológico, espiritual o en el fuero interno, cualquiera sea su orden.

Señala que en la especie el demandante civil deberá justificar precisamente las manifestaciones externas del daño



moral que invoca. En este sentido, indica que ha de tenerse presente que debe tratarse de un daño efectivo a la integridad física o psíquica de la persona y no al acaecimiento de meras molestias sufridas con ocasión de un accidente que si bien, derivo en el sensible fallecimiento de la víctima hijo de los demandantes, ello no quiere decir que existe en forma inmediata y presumible un daño moral, y que son muchos los factores que determinan la existencia del daño moral, siendo los principales la cercanía de del demandante con la víctima, las repercusiones psicológicas a futuro que ello mantenga, pues no es lo mismo indemnizar al padre que tiene un lazo afectivo cercano con el hijo al padre que ha sido ausente durante toda la vida de la víctima, por lo que alega que se deberá probar el lazo efectivo.

Alude que la demanda adolecería de un defecto importante y que no puede ser subsanado en esta altura del procedimiento, en cuanto a que los mandantes no señalan en forma específica la naturaleza del daño moral, respecto de cual es el sustento jurídico para ello, porque entienden que el afectado principal es la persona que falleció, por ende, quien hubiese sido el titular de la acción para demandar este daño era precisamente la víctima por ende los demandantes deberían haber dejado en claro la naturaleza del daño moral que demandan, en cuanto a si es propio o si es por repercusión.

Afirman que dicho trabajo intelectual no fue esgrimido en la demanda y tampoco desarrollado, por lo que el sentenciador no podría subsanar esta omisión ni aun a pretexto del adagio "iura novit curia", "el juez conoce el



derecho", pues es resorte de todo litigante fundamentar adecuadamente sus acciones para encuadrarla en un supuesto legal y con ello el juez podrá analizar y determinar si procede o no la pretensión, trabajo intelectual que indica no se realizó.

Reitera que la regla general es que todo daño debe ser probado, incluso el daño moral, entendido como el menoscabo o detrimento de derechos lo intereses extrapecuniarios; lo que haría necesario que la demandante acreditara la entidad del daño que expresa haber sufrido, en términos que habilite al Tribunal para apreciar su existencia y gravedad, cuantificarlo y regular sobre bases ciertas el monto de la indemnización que con este fundamento se reclama, de manera que no habiendo rendido prueba alguna sobre el particular, su demanda deberá ser necesariamente desestimada en esta parte.

En atención a la falta de acreditación de los hechos alegados y a los montos excesivos demandados, solicita se le exima del pago de las costas por considerarse tener motivo plausible para litigar. Y a su vez, para el improbable evento que se tengan por acreditados los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios solicitada por el actor, y por acreditados los daños demandados, solicita se rebaje proporcionalmente la indemnización por tratarse de montos excesivos, no acreditados y que no se condicen con la realidad, y en atención a ello y por considerarse tener motivo plausible para litigar, se le exima del pago de las costas.



Es así como, en mérito de lo expuesto, de los artículo que cita y los que fueren procedentes, solicita tener por contestada la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida, rechazar la misma en todas sus partes con expresa condenación en costas o en subsidio rebajar los montos demandados en virtud de los argumentos expuestos y absolver del pago de las costas a su representado por haber tenido motivo plausible para litigar.

Con fecha **14 de febrero de 2022** se tuvo por contestada la demanda en rebeldía del demandado Daniel Silva Araya.

Con fecha **18 de febrero de 2022**, la parte demandante evacuó el trámite de réplica iniciando con una relación de los argumentos ya descritos de la demandada solidaria, argumentando luego que la Ley N° 18.290, establece un estatuto especial de responsabilidad civil por los daños que pueden ocasionar los vehículos motorizados, extendiendo a los accidentes del tránsito el régimen general de responsabilidad por negligencia del Título XXXV del Libro Cuarto del Código Civil, y transcribe lo establecido en los artículo 170 y 174 de dicho cuerpo legal.

Refiere que las citadas disposiciones, configuran un sistema de reparación de daños estructurado sobre la base de una responsabilidad del propietario del vehículo, que tiene por antecedente la culpa del conductor, pero alega que, cumplida esa condición, es objetiva respecto de la víctima de esa negligencia; responsabilidad que presupone que el conductor del vehículo por cuyo acto responde su propietario, haya actuado negligentemente, esto es, no haya actuado con la



consideración de los deberes generales de cuidado que resultan exigibles, o bien, por infringir las normas legales que rigen la actividad.

Afirma que para que el propietario de un vehículo motorizado, pueda ser condenado a resarcir los perjuicios derivados de un accidente, debe acreditarse en juicio una acción u omisión del conductor de dicho vehículo, realizada con dolo o negligencia y que dicha conducta haya causado daños a la demandante.

Manifiesta que concurriendo todas y cada una de las condiciones referidas, la responsabilidad civil entre el conductor del vehículo y su propietario será solidaria, de acuerdo a las reglas generales.

Finaliza aludiendo que en la sentencia penal acompañada en autos, se acredita que el demandado don Daniel Samuel Silva Araya conducía el camión patente GGWT.51, al momento en que se produjo el delito, por lo que es responsable de los perjuicios que provocó, de conformidad a las normas señaladas, y el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que acredite que el vehículo fue usado contra su voluntad, siendo solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se hayan ocasionado con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la legislación vigente.

Con fecha **21 de marzo de 2022**, se tuvo por evacuado el trámite de la dúplica en rebeldía de los demandados.

Con fecha **28 de abril de 2022**, consta que se celebró audiencia de conciliación con asistencia de los



apoderados de la parte demandante y de la demandada solidaria, constando la inasistencia del demandado principal y que la misma se declaró frustrada.

Con fecha **03 de mayo de 2022**, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

Con fecha **01 de marzo de 2023**, se citó a las partes a oír sentencia.

Con fecha **12 de mayo 2023** se decretó medida para mejor resolver, la que se tuvo por cumplida con fecha **06 de junio 2023**, trayéndose los autos para fallo con esa fecha.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se ha deducido demanda de indemnización de perjuicios en contra de **Daniel Samuel Silva Araya**, y de **Soluciones Asfálticas S.A**, en sus calidades de conductor y propietario, respectivamente, del vehículo placa patente GGWT.51-4, para que sean condenados a pagar solidariamente a la actora, las sumas de \$1.978.518.- por daño emergente, de \$29.760.480.- por lucro cesante y \$200.000.000.- por daño moral, por los hechos y fundamentos de derecho ya señalados en la parte expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que el demandado Daniel Silva Araya no contestó la demanda, por lo que se entiende controvertir todos los fundamentos del libelo.

TERCERO: Que a su vez la demandada solidaria, contestó la demanda de autos, alegando por un lado el eximente de responsabilidad establecido en la Ley 18.290, y por otro lado su falta de legitimidad pasiva, debiendo responder en este caso solidariamente la empresa empleadora



del conductor debido a la responsabilidad por el hecho ajeno de su empleado, tal como se expone en lo expositivo.

CUARTO: Que, persiguiéndose por los actores hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del demandado Daniel Samuel Silva Araya, y la responsabilidad solidaria de Soluciones Asfálticas S.A, debe entonces determinarse si concurren en autos los presupuestos de éstas.

Respecto a la Responsabilidad Extracontractual del demandado Daniel Silva Araya

QUINTO: Al respecto, el artículo 2314 del Código Civil prescribe "el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito". A su vez, el artículo 2329 del mismo código señala que "por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta".

De las disposiciones transcritas se desprenden los presupuestos de la responsabilidad extracontractual, de la cual surge la obligación de indemnizar, a saber: a) que se haya causado un daño; b) que el hecho que lo generó provenga de dolo o culpa; c) que exista un nexo causal entre el hecho doloso o culposo y el daño y d) que el autor sea capaz de delito o cuasidelito civil.

SEXTO: Que, la concurrencia de los requisitos antes descritos, debía acreditarse por los actores, conforme las reglas generales de la prueba.

SÉPTIMO: Que, primeramente, en cuanto a la capacidad delictual o cuasidelictual civil del demandado, la



regla general, es que toda persona natural o jurídica sea capaz de delito o cuasidelito civil. Solo son incapaces, los que carecen del discernimiento necesario para darse cuenta del acto que ejecutan, lo que no ocurre en la especie, ni se ha alegado en el proceso, de manera que debe presumirse la capacidad del demandado, concurriendo de esta manera el primer elemento que se analiza.

OCTAVO: Que, luego, respecto a la ocurrencia de un hecho u omisión culpable que sea imputable, debe señalarse que conforme aparece del acta de audiencia de juicio oral simplificado, celebrada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta -acompañada por la demandada solidaria en folio 98- y tenida a la vista la causa RIT 2639- 2018- como medida para mejor resolver a través de la consulta unificada de causas del portal del Poder Judicial- en la que consta que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada, don Daniel Samuel Silva Araya, conductor del vehículo patente GGWT-51 fue condenado a sufrir la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, más 301 días de presidio menor en su grado mínimo, con pena sustitutiva de reclusión parcial nocturna domiciliaria por un total de 842 días, más las accesorias de suspensión por dos años de su licencia de conducir, y suspensión de cargo u oficio públicos durante el tiempo ambas condenas; todo esto al ser considerado como autor de cuasidelito de homicidio, y conducción de vehículo sin contar con licencia profesional debida, responsabilizándolo de los hechos ocurridos el día 03 de marzo del 2018.

La sentencia tiene influencia en lo debatido en estos autos, pues al haberse dictado en un procedimiento de



naturaleza penal produce cosa juzgada en el juicio civil seguido para determinar la procedencia de las indemnizaciones de perjuicios derivados de los mismos hechos, pues debe aplicarse lo establecido en los artículos 174 a 180 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el efecto de cosa juzgada, en virtud del cual, de acuerdo al artículo 178 de este último cuerpo legal: "En los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al procesado"; juicios éstos en los que, según el artículo 180 del Código citado, no es lícito: "tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia, o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento".

NOVENO: Que en ese entendido, debe tenerse como hechos de la causa los hechos resumidos en la sentencia del 22 de agosto del 2022, que son los siguientes: "El día 03 de marzo de 2018, a las 10:00 horas, aproximadamente, el imputado DANIEL SAMUEL SILVA ARAYA, ya individualizado, condujo el camión marca JAC, modelo VIEBAN, PPU GGWT 51, de propiedad de la empresa Soluciones Asfálticas S.A, con un peso bruto vehicular de 10.240 kilos, sin haber obtenido licencia profesional que lo habilitara para ello y sin la autorización de la empresa señalada, circulando a gran velocidad por Avenida Salvador Allende de Antofagasta hacia el poniente, no respetando la señal luminosa del semáforo en ROJO ubicada en la intersección con Avenida Bonilla, debido a la falta de experiencia en la conducción, manipulando de forma imprudente los sistemas del móvil, producto de lo cual colisionó al vehículo PPU WV 8121, conducido por don Carlos



Segundo Flores Paz, para luego colisionar a la camioneta PPU FGFS 41, conducida por don Juan Guillermo Carvajal Alvarez. Ante todo ello, continuó la marcha descontrolada del móvil colisionando un poste de semáforo, un poste del alumbrado público y atropellando a don Eduardo Antonio Gallegos Cortés, quien se encontraba sobre la acera esperando locomoción colectiva, producto de lo cual resultó con lesiones consistentes en un shock hipovolémico por hemoperitoneo masivo, secundario a desgarró esplénico, lesiones que le causaron la muerte horas más tarde en el Hospital de esta ciudad".

DÉCIMO: Que, en virtud de lo señalado en los motivos octavo y noveno del presente fallo, encontrándose determinada la responsabilidad del demandado principal, Daniel Samuel Silva Araya, y con ello la acción culposa de aquél, debe discutirse en este juicio sólo la naturaleza y monto de los perjuicios demandados.

UNDECIMO: Al respecto y para probar su pretensión la parte demandante rindió prueba documental, acompañando los siguientes documentos: A folio 1: 1.- Certificado de defunción de don Eduardo Antonio Gallegos Cortés. 2.- Certificado de nacimiento de don Eduardo Antonio Gallegos Cortés. 3.- Certificado de matrimonio de don Eduardo Gallegos Diaz y doña Pascuala Cortés Cortés. 4.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M. del vehículo PPU GGWT.51-4 de propiedad de Soluciones Asfálticas S.A. 5.- Certificado de posesión efectiva quedados al fallecimiento de don Eduardo Antonio Gallegos Cortés, concedida por el Director (a) Regional Región de Antofagasta por Resolución Exenta No. 1902,



de fecha 26 de marzo del 2019 a don Eduardo Segundo Gallegos Díaz.

Folio 119: Páginas 1 y 5 del diario La Estrella de Antofagasta, en su edición del día 05 de Marzo del 2018, en los que se publica la noticia del accidente de autos.

A folio 126: set de 10 fotografías captadas en el día y lugar en que ocurrió el accidente.

A folio 130: Programa de atención realizada a don Eduardo Gallegos Cortes emitida con fecha 07 de marzo del 2018 por la Unidad de Recaudación del Hospital Clínico Regional de Antofagasta; Programa médico SOAP del paciente Eduardo Gallegos Cortés, emitido con fecha 09 de Abril del 2018 por la Unidad de Recaudación del Hospital Clínico Regional de Antofagasta; Comprobante de pago de pensión efectuada por AFP Capital a don Eduardo Gallegos Cortés, de 20 de junio del 2017; Contrato por adquisición de servicios fúnebres a Eduardo Gallegos Cortés extendido por Funerales Castillo E.I.R.L. con fecha 04 de marzo del 2018; Carta remitida a la Alcaldesa de esta ciudad doña Karen Rojo Venegas con fecha 05 de marzo del 2018. Factura electrónica No.579 de fecha 09 de marzo del 2018, por servicios fúnebres.

Folio 135 y 136: Informes psicológicos de doña Pascuala de los Santos Cortés Cortés y don Eduardo Segundo Gallegos Díaz, evacuados por el Perito Psicólogo don Felipe Guerra Aguirre; Certificado de Título de Psicólogo, extendido por la Universidad Católica del Norte; Certificado del Diplomado en Evaluación Psicológica Forense; Curriculum vitae.

Que de igual forma solicitó oficios: 1.- Al Juzgado de Garantía de esta ciudad, a objeto de que remitiera todos



los antecedentes que correspondan a la causa RIT 2639-2018, R.U.C..1810009591-9. 2.- A la Fiscalía Regional de esta ciudad, a objeto de que remitiera fotocopia de la carpeta de investigación RIT 2639-2018, R.U.C..1810009591-9, que se da inicio a consecuencia del accidente. 3.- Al Hospital Regional de esta ciudad, a objeto de que remitiera la ficha clínica de atención de Eduardo Antonio Gallegos Cortés. 4.- Al Cuartel General De Bomberos de esta ciudad, a objeto de que remitiera fotografías e informe del accidente ocurrido el día 03 de marzo del 2018 en la intersección de Avenida Salvador Allende con Avenida Bonilla. 5.- A la AFP PROVIDA S.A., a objeto de que remitiera certificado de cotizaciones previsionales por todo el período trabajado por don Daniel Samuel Silva Araya (folio 108). 6.- A la Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAN) de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, a objeto de que informe si, en la ejecución de la obra Relleno Sanitario de Chaqueta Blanca por la empresa Soluciones Asfálticas S.A., se instaló una garita de control de acceso de camiones, sea en forma provisional para el desarrollo de la obra o definitiva, como parte del Proyecto.- 7.- A la Fiscalía Regional, a objeto de que informe si existió denuncia por parte de la empresa Soluciones Asfálticas S.A., del hurto, robo o sustracción del camión patente GGWT.51-4. 8.- Al Servicio de Registro Civil e Identificación de esta ciudad a objeto de que emitiera el certificado de discapacidad de don Eduardo Antonio Gallegos Cortes (Q.E.P.D). (folio 120)

Al respecto se recibieron las respuestas de dichos oficios en folios 118 (Hospital), 138 (Fiscalía Regional), a



folio 141 (AFP Provida S.A) y a folio 148 (Servicio de Registro Civil e Identificación.

Asimismo, rindió prueba testimonial compareciendo ante este tribunal, con fecha 02 de septiembre del 2022, doña Johanna Isabel Luna Marín; don Luis Mario Ramírez Marabolí; don Luis Andrés Ramos Bustos, don Felipe Andrés Lobos Guajardo, doña Gloria Paola Chavera Jiménez, doña Nataly Paola Araya Ugarte, y don Felipe Andrés Guerra Aguirre, quienes declararon al tenor de los puntos de prueba 1, 2 y 4 fijados.

También solicitó la prueba confesional de ambos demandados, los que fueron citadas y notificados legalmente en 2 oportunidades, sin comparecer uno de ellos, Daniel Silva Araya, a los llamados del ministro de fe, por lo que con fecha 24 de enero del 2023 se hizo efectivo el apercibimiento del artículo 394 del Código de Procedimiento Civil teniéndolo por confeso en todos aquéllos hechos que se encuentran categóricamente afirmados en el pliego de posiciones que constan a folio 183, y compareciendo la otra demandada, Soluciones Asfálticas S.A, debidamente representada a absolver posiciones con fecha 23 de diciembre del 2022, respondiendo las preguntas del pliego que consta a folio 174.

DÉCIMO SEGUNDO: Que por su parte el demandado principal no rindió prueba alguna.

DÉCIMO TERCERO: Que, con fecha 12 de mayo del 2023, se decretó como medida para mejor resolver, tener a la vista, a través de la Consulta de Causas, de la Oficina Judicial Virtual, la causa RIT Ordinaria 2639-2018 seguida ante Juzgado



de Garantía de Antofagasta e incorporar a los autos sus piezas principales.

DÉCIMO CUARTO: Que, así las cosas, en cuanto a la naturaleza y monto de los daños, la parte demandante, solicitó daño emergente, lucro cesante y daño moral que se analizan a continuación.

DÉCIMO QUINTO: Que la parte demandante ha solicitado a título de daño emergente la suma de \$1.978.518.- por el costo de los gastos médico, fúnebres y de sepultación.

Al respecto, constan en el proceso los siguientes documentos: Programa médico SOAP del paciente Eduardo Gallegos Cortés, emitido con fecha 09 de Abril del 2018 por la Unidad de Recaudación del Hospital Clínico Regional de Antofagasta; Contrato por adquisición de servicios fúnebres a Eduardo Gallegos Cortés extendido por Funerales Castillo E.I.R.L. con fecha 04 de marzo del 2018; Factura electrónica No.579 de fecha 09 de marzo del 2018, por servicios fúnebres.

Los documentos descritos, atendido a que aparecen a nombre de uno de los demandantes y que contienen fechas posteriores a la de la realización del hecho ilícito-3 de marzo 2018-, unido a lo declarado por los testigos de su parte, permiten tener por acreditado que los demandantes tuvieron que desembolsar diversos montos por concepto de saldo de gastos de atención médica que no cubrió el Seguro y posteriores gastos fúnebres, los que en total ascienden a la suma de \$1.978.518.-, por lo que se concederá dicha suma por concepto de daño emergente.



DÉCIMO SEXTO: A su vez los actores demandan por concepto de lucro cesante la suma de \$29.760.480.- fundados en que el hecho ilícito del demandado los habría privado de uno de sus medios de subsistencia, pues su hijo aportaba al hogar su pensión asistencial, calculada anualmente en \$1.488.024.-, suma mínima que, se indica, el difunto destinaba exclusivamente al hogar, proyectada a 20 años que a lo menos habría podido vivir.

Al respecto, debemos tener presente que el lucro cesante es la pérdida efectiva de una ganancia cierta, o como lo conceptualiza el autor Pablo Rodríguez Grez, corresponde a la utilidad, provecho o beneficio económico que una persona deja de obtener como consecuencia del hecho ilícito (Rodríguez Grez, Pablo. Responsabilidad Extracontractual, Ed. 2004, p. 291.)

Así, para que surja la obligación de indemnizar el lucro cesante, es necesario que la parte demandante sea capaz de acreditarlo, cuestión que no ha ocurrido en la especie, pues si bien se desprende de las declaraciones de los testigos citados por los demandantes, que don Eduardo Antonio Gallegos Cortés (Q.E.P.D.), aportaba al hogar y a su familia, incluidos sus padres, el monto de su pensión por discapacidad auditiva, sólo se acompañó en autos un comprobante de pago de AFP Capital (folio 130), el que contiene el pago de un mes, de lo que se denomina en el mismo documento como "retiro programado", por lo que no se han logrado acreditar de manera suficiente los montos que eran percibidos mensualmente por el hijo de los demandantes en razón de una pensión por



discapacidad aportada a su núcleo familiar. En consecuencia, corresponde rechazar la partida del lucro cesante.

DÉCIMO SÉPTIMO: Finalmente, los demandantes solicitaron la suma de \$200.000.000.-, a razón de \$100.000.000.- por cada uno de ellos por concepto de daño moral.

DECIMO OCTAVO: Que, lo demandado por los actores es lo que se conoce doctrinariamente como "daño reflejo por repercusión". Se define como el sufrido por las víctimas mediatas de un hecho que ha causado la muerte o lesiones a otra persona.

El profesor Enrique Barros Bourie, en su libro "Tratado de Responsabilidad Extracontractual", señala que "Aunque la muerte sea tenida por el mayor de los males, no puede conceder acción a quien la sufre, pues se trataría de un derecho carente de un sujeto que esté legitimado para alegar interés persona; pero sí puede serlo para personas que estaban ligadas patrimonial o afectivamente a ella..." (pág.345).

El daño reflejo puede ser patrimonial o moral, lo importante es que la acción que surge pertenece personalmente a quien lo sufre, siendo el mayor problema jurídico que presenta, el establecimiento de sus límites, en cuanto a los intereses de las víctimas protegidos por el derecho y los titulares de la acción.

DÉCIMO NOVENO: Que, como se dijo, los demandantes solicitaron indemnización por daño moral la suma ascendente a \$200.000.000.-, el que fundaron en el dolor causado por



perder a un ser querido tan cercano y en las condiciones ya descritas.

Para acreditar el daño extrapatrimonial que se invoca, acompañaron a fojas 139, informes psicológicos respecto de doña Pascuala de los Santos Cortés Cortés y don Eduardo Segundo Gallegos Díaz, emitidos por el psicólogo don Felipe Andrés Guerra Aguirre - no objetados- quien compareció en autos como testigo reconociendo dichos informes; los cuales dan cuenta que los demandantes han tenido que realizar tratamiento psicológico y en donde se concluye respecto a ambos, que transcurridos más de cuatro años a la fecha del accidente, se evidencia la presencia de daño psíquico o moral, asociado a la vivencia del evento traumático que dio génesis al informe, originado desde el fallecimiento de su hijo, lo cual habría impactado la salud mental de los pacientes al desarrollar un cuadro depresivo vinculado a un estado de duelo patológico el cual habría mermado sus calidades de vida y salud física.

Por su parte, se rindió prueba testimonial para acreditar los perjuicios morales, de don Felipe Andrés Guerra Aguirre, quien junto con ratificar los informes de fojas 139, manifestó haber evaluado a las demandantes, concluyendo lo siguiente: *"mis pacientes están siendo en estos momentos trabajados o están en terapias debido a un episodio depresivo grave que en doña Pascuala se ha visto quizás un poco que nosotros llamamos Una somatización de la enfermedad, esto quiere decir, que el impacto mental de la depresión, ha afectado a nivel físico a mi paciente no así don Eduardo, que pareciera que tiene mecanismos de defensa asociadas más a la*



negación y con una baja expresión emocional en resumen o en síntesis, como profesional de salud mental yo sí puedo evidenciar un daño emocional en mis pacientes debido a un estado depresivo0 crónico que estaría afectando a su salud física".

También comparecieron a estrados los testigos doña Johanna Isabel Luna Marín, quien manifestó ser la presidenta de la población en donde viven los demandantes, y señaló: *La señora Pascuala, era una mujer llena de vida, excelente vecina, compartía mucho con todos, solía salir a recorrer nuestra población a pesar de que estaba un poco.. no caminaba muy bien, desde el día del accidente, ya nadie más la vio, ella cayó en cama por una depresión la cual la llevó a que sus enfermedades se acrecentaran y ya al caer en cama postrada y no querer levantarse más. Mas que nada dejó de ser la mujer que era. Don Eduardo, don Eduardo al igual que la señora Pascuala, el cambio en él fue muy notorio, trató de darse ánimo ya que tampoco fue el mismo después del accidente. También dejamos de verlo mucho por el hecho de estar al lado de su esposa y ya no volvió a ser la misma persona de antes. Nosotros que lo vemos más a él, dejamos de ver a ese hombre lleno de vida que era ya no volvió a ser el Eduardo de siempre.*

De la misma manera compareció don Luis Andrés Ramos Bustos, quien declaró ser pareja de una de las sobrinas que vivía con el fallecido, señalando que: *"en tanto al daño psicológico que hubo en la familia es tremendo e irrecuperable hasta el día de hoy. Su madre desde el día que falleció Eduardo, está completamente destruida hasta el día*



de hoy ella perdió las ganas de vivir, por mi parte, recurrentemente me acerco para saber cómo se encuentran a lo que ella constantemente a través de un llanto desconsolado me dice que aún no lo supera; su padre también está sufriendo lo mismo, don Eduardo Gallegos, él después que falleció su hijo también cayó en una depresión al ver que su esposa se quería morir diciéndolo abiertamente a la familia. En fechas importantes, es completamente penoso ver el estado del padre y madre de Eduardo Q.E.P.D. ya que mayor parte de ese día se trata de recuerdos y llantos"

VIGÉSIMO: Que, el daño moral ha sido definido como todo perjuicio a la persona en sí misma, físico o psíquico, o como todo atentado a sus intereses extrapatrimoniales, y que comprende entonces el atentado a los derechos de la persona, a su salud, a su estética, esfera de intimidad, libertad, honor o sentimientos de afección.

Este tipo de daño es claramente indemnizable en materia de responsabilidad extracontractual, desde que el artículo 2.329 del Código Civil, establece que todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.

Ahora bien, la función de apreciar por el juez el daño moral fundado en el perjuicio afectivo, como en este caso, es particularmente delicada, debido a la dificultad de llevar a un valor económico los sentimientos hacia las personas más próximas. Sin embargo, la dificultad de apreciarlo y de establecer sus límites no puede ser razón para excluirlo de indemnización, ya que no hay inconvenientes legales para indemnizar este tipo de perjuicios.



Por lo demás, en nuestro derecho existe un amplio reconocimiento de la reparabilidad del perjuicio afectivo que se sigue de la muerte de una persona muy cercana, siendo una de las principales manifestaciones del daño moral.

No obstante, una de las principales dificultades que presenta, es la extensión de los titulares de la acción de reparación, ya que la muerte de una persona puede provocar un sufrimiento cierto y profundo en un gran espectro de familiares y amigos, tendiendo la jurisprudencia nacional a definir los titulares de la acción de acuerdo a la cercanía que da el parentesco, de modo que los parientes más cercanos excluyen a los más remoto, lo que de alguna forma ha sido reconocido por el Código Procesal Penal, en el artículo 108 en relación al 59 inciso segundo, al regular la titularidad activa de la acción civil de la víctima.

VIGESIMO PRIMERO: Que, en relación a lo señalado, en autos, se encuentra acreditado por medio de los documentos públicos acompañados a folio 102, la relación de parentesco de las demandantes con la víctima inmediata del accidente de tránsito fatal, siendo su madre y padre, además de los únicos herederos, de conformidad a la resolución que concedió la posesión efectiva acompañada a la causa, debiendo considerarse entonces titulares de la acción indemnizatoria.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, en cuanto al monto de la indemnización, el carácter extrapatrimonial del daño moral hace que sea difícil su valoración, sin embargo esto no puede ser impedimento para su otorgamiento.



A diferencia de lo que ocurre con los daños patrimoniales, los daños morales no pueden ser objeto de reparación, ya que la indemnización no permite a la víctima volver al estado de las cosas anterior al accidente, sin embargo el derecho debe restituir, dentro de lo razonable, el orden alterado por el hecho negligente o doloso del demandado, de modo que la función de la indemnización es más bien compensatoria, vale decir, no pretende restablecer el estado de las cosas anteriores al daño, sino que permitir ciertas ventajas que satisfagan su pretensión legítima de justicia y la compensen por el mal recibido.

VIGESIMO TERCERO: Que, en principio, como todo daño, el perjuicio moral debe ser probado por quien lo alega, sin embargo es evidente que debido a su naturaleza, presenta indudables limitaciones probatorias, por la dificultad que representa transmitir sensaciones internas de pena, dolor o aflicción.

Atendida la naturaleza del daño moral, si bien solo puede ser inferido, nada impide que pueda presumirse judicialmente. En el caso de autos, acreditada la relación de parentesco cercano de las demandantes; madre y padre de la víctima, no puede sino presumirse el dolor experimentado por la muerte de la persona con que convivían. Por lo demás, el daño sufrido por la pérdida del hijo, se ha acreditado por medio de los documentos que contienen informes psicológicos y la declaración de los testigos que se refieren al trastorno ocasionado por dichas pérdidas, a los que se han hecho referencia en los motivos precedentes.



Así las cosas, no puede sino acogerse la pretensión indemnizatoria de los actores en lo que respecta al daño moral, y en virtud de que no existen parámetros legales que permitan fijar el monto, éste debe ser regulado en forma prudencial y equitativa por el juez, y en base a los antecedentes del proceso, se regulará en este caso en la suma total de \$60.000.000, conjuntamente para los demandantes doña Pascuala de los Santos Cortés Cortés y don Eduardo Segundo Gallegos Díaz.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, las sumas que se ordenarán pagar, deberán ser reajustadas de acuerdo a la variación del IPC entre la fecha de esta sentencia y la del pago efectivo, más los intereses corrientes, desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

Respecto a la Responsabilidad Solidaria de la dueña del vehículo.

VIGÉSIMO QUINTO: Que la parte demandante además ha demandado a la empresa **Soluciones Asfálticas S.A.**, en su calidad de propietaria del vehículo causante de los daños, para que sea condenada solidariamente a pagar las indemnizaciones pedidas.

Que el artículo 169 de la Ley 18.290 establece que de las infracciones a los preceptos del tránsito será responsable el conductor del vehículo. Y el conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se ocasionen con su uso, sin



perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la legislación vigente.

Que de esta forma, habiéndose acreditado por una parte, la responsabilidad de don Daniel Samuel Silva Araya, conductor del vehículo placa patente GGWT-51, en los hechos ocurridos el día 03 de marzo de 2018 y la calidad de propietario de dicho móvil de la empresa Soluciones Asfálticas S.A., con el certificado de inscripción y anotaciones vigentes acompañado por la parte demandante, se da la hipótesis de responsabilidad solidaria establecida en la norma citada.

VIGÉSIMO SEXTO: Ahora bien, al respecto la demandada solidaria ha alegado que en el presente caso ha operado el eximente de responsabilidad establecida en el artículo 169, de la ley 18.290, en cuanto prescribe que: "De las infracciones a los preceptos del tránsito será responsable el conductor del vehículo. El conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la legislación vigente."

Al respecto y para acreditar la eximente alegada, la demandada solidaria ha acompañado la acusación y la sentencia penal de causa RIT 2639 - 2018, expediente digital que se tuvo a la vista a raíz de la medida para mejor resolver dictada en autos, y a su vez ha solicitado mediante oficio, la remisión de la carpeta investigativa llevada por



Fiscalía Regional de esta ciudad en dicho juicio, la que ha sido remitida por la señalada institución a este tribunal, teniéndose a la vista la misma.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que de los antecedentes aportados y tenidos a la vista, en especial que en la sentencia penal ejecutoriada se ha establecido como hechos constitutivos de los ilícitos que el demandado principal de autos cometió el hecho ilícito conduciendo el camión marca JAC, modelo VIEBAN, PPU GGWT-51, de propiedad de la empresa Soluciones Asfálticas S.A, con un peso bruto vehicular de 10.240 kilos, sin haber obtenido licencia profesional que lo habilitara para ello y sin la autorización de la empresa dueña del vehículo demandada en autos.

Por lo demás, dicha situación también consta en el informe de la SIAT de Carabineros, que consta en la carpeta investigativa, donde se expone la dinámica del accidente y causa basal, consignándose que se establecieron en base a los siguientes aspectos técnicos: en la letra j), se indica las declaraciones de los participantes y testigos realizados por el oficial investigador, siendo coincidentes entre sí.

En la letra k), se indica: *"Se fundamenta la nula experiencia y experticia en la conducción toda vez que el participante (1) en su propia declaración indicó que no tenía licencia de conductor como tampoco conocimientos de conducción e inclusive no sabía distinguir entre los pedales del móvil, por tanto, no contaba con la idoneidad física y psíquica, los conocimientos teóricos y prácticos sobre las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la*



prestación de servicios de transporte de carga por vías públicas".

A su turno, en la letra l) de dicho informe se señala: "Es importante hacer presente que el participante (1), señaló que en los momentos que se desempeñaba como guardia de seguridad, se subió al móvil (1), donde encendió el motor, escuchando música y manipulando otros sistemas del móvil de los cuales no especificó, por lo cual realizó la manipulación en forma imprudente de los sistemas ya sean de dirección o de frenos, lo que provocó que el móvil se desenganche..."

A lo anterior se debe agregar que según se expone en el informe de Carabineros, el demandado era guardia de seguridad, cuyo empleador era una persona jurídica distinta al propietario del vehículo, según también se desprende del certificado emanado de la AFP y que fue agregado a la causa a folio 141, por lo que cumpliéndose con los presupuestos legales de la eximente de responsabilidad establecida por la ley de tránsito en la norma ya mencionada, no cabe sino rechazar la demanda de autos en cuanto por ella se reclama la responsabilidad solidaria de la empresa Soluciones Asfálticas S.A. en el resarcimiento de los perjuicios causados con motivo del accidente vehicular.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, habiéndose acogido la eximente de responsabilidad analizada en el motivo anterior, resulta innecesario pronunciarse respecto de la falta de legitimación pasiva o de las otras alegaciones de la demandada.



VIGÉSIMO NOVENO: Que, el resto de la prueba rendida en autos, en nada altera lo concluido precedentemente.

Y VISTO además lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 174 al 180, 341 y 394 del Código de Procedimiento Civil; 1437, 2314, 2315, 2316 y 2329 del Código Civil; y artículo 169 de la Ley 18.290, **SE DECLARA:**

I.- Que se **acoge** la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta en lo principal de la presentación de fecha 24 de junio 2019, por don **Eduardo Segundo Gallegos Díaz**, y doña **Pascuala de los Santos Cortés Cortés**, solo en cuanto, se condena a don **Daniel Samuel Silva Araya** a pagar a los demandantes la suma de \$1.978.518.-, por concepto de daño emergente, y la suma de \$60.000.000 - a título de daño moral.

II.- La suma antes referida deberá reajustarse de conformidad a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y la época de su pago efectivo; y generará intereses corrientes para operaciones no reajustables desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

III.- Que, **se rechaza** la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta solidariamente en contra de Soluciones Asfálticas S.A., por haber operado eximente de responsabilidad en el motivo vigésimo séptimo de esta sentencia.

IV.- Que, habiéndose rechazado la demanda en contra del demandado solidario Soluciones Asfálticas S.A., resulta innecesario pronunciarse sobre las demás alegaciones formuladas en la contestación de folio 8.

V.- Que, cada parte pagará sus costas.



C-3467-2019

**Regístrese, notifíquese y en su oportunidad
archívese.**

Dictada por doña, **Susana Tobar Bravo**, Juez Titular

Rol N° 3467-2019

CERTIFICO: Que, con esta fecha se dio cumplimiento a lo
dispuesto en el inciso final del artículo 162 del Código de
Procedimiento Civil. Antofagasta, 17 de agosto de 2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXDYXHQCSC